

22ª SESION ORDINARIA DEL 24 DE AGOSTO DE 1880

PRESIDENCIA DEL Sr. DEL VALLE

SUMARIO: I.—El señor Senador Ortiz funda un proyecto proponiendo la prolongación del Ferrocarril de Tucumán á Jujuy, y la traza que debe seguir. (A la Comisión del Interior).

II.—El señor Senador Pizarro hace moción para que se señale un término dentro del cual deba expedirse la Comisión especial encargada de dictaminar en la cuestión Capital. Se rechaza.

Señores senadores

Argento
Baltoré
Bárcena
Baibíene
Carrillo
Civit
Del Viso
Figueroa
Frias
Gelabert
Leguizamón
Lucero
Navarro
Ortiz
Paz
Pizarro
Rocha
Santillán
Vélez
Villanueva

En Belgrano, á los veinte y cuatro días del mes de Agosto del año de mil ochocientos ochenta, reunidos en su sala de sesiones los señores senadores al margen inscriptos, el señor Presidente proclamó abierta la sesión.

Leída, aprobada y firmada el acta de la anterior, se da cuenta de los asuntos entrados, en esta forma:

—Un mensaje del Poder Ejecutivo por el cual pide autorización para acordar á la viuda del coronel Murature la pensión que le corresponde.

—A la Comisión de Peticiones.

CON LICENCIA:

Febre
Padilla
—Don Juan M. Cárrega pide copia de los documentos anexos á la solicitud que tiene que presentar al Congreso.

—A la Comisión de Peticiones.

I

—Se lee el siguiente proyecto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación, sancionan con fuerza de

LEY:

Artículo 1.º Para la prolongación del Ferrocarril de Tucumán á Jujuy, queda aceptada la traza del Este que partiendo de Tucumán pasa por Burrayaco y Metán.

Art. 2.º La construcción se hará por una comisión de cinco ciudadanos de responsabilidad que residirá en la ciudad de Tucumán, nombrada por el Poder Ejecutivo y con el sueldo mensual de 100 fuertes á cada uno y 20 fuertes para gastos de escritorio. Esta comisión será presidida por el director gerente del Ferrocarril Central Norte, á cuyo cargo estará la dirección técnica de los trabajos, la confección de planos y presupuestos y la inspección y recepción de las obras contratadas y los materiales de construcción.

Art. 3.º El Poder Ejecutivo reglamentará las atribuciones y deberes de la Comisión, la que con el visto bueno del director gerente, someterá mensualmente al Ministerio del Interior las cuentas de su administración, y éste con su informe las pasará en el mes de Junio de cada año al Congreso para su aprobación. El director general será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y gozará un sobresueldo por este trabajo de 200 pesos fuertes mensuales.

Art. 4.º La vía y su explotación se dividirá en tres secciones y serán de Tucumán á Metán, de Metán á Salta y de Salta á Jujuy.

próximamente que se eleva á diez mil pesos mensuales.

Con esta insignificante cantidad, no podrían construirse más de dos ó tres kilómetros de terraplén; y por lo tanto me parece que debiéramos destinar cincuenta mil pesos fuertes de los fondos que están depositados en Londres para esta obra, según lo determina la ley de Septiembre del año pasado.

No abrigo la pretensión de que este proyecto es perfecto, porque no he tenido tiempo para confeccionarlo, ni reuno suficiente competencia para presentar una obra acabada; pero espero que la Comisión, una vez en posesión de los datos científicos que puedan proporcionarlos los ingenieros, pueda despacharlo brevemente y con mayores conocimientos.

El proyecto que he presentado no es nuevo; es únicamente el cumplimiento de la ley dictada en Septiembre del año pasado. El artículo 1.º de esta ley disponía que se haría el ferrocarril por la traza que se creyese más conveniente, y este proyecto tiene por objeto fijar esa traza.

Para los gastos de construcción se destinaron también los dineros que habían quedado del empréstito, y hace pocos meses había setecientas mil libras. Suponiendo que se haya gastado la mitad, siempre quedará una cantidad para iniciar ó continuar este trabajo.

La única variación que se hace en la ley anterior es respecto á la manera de hacer la construcción.

Por la ley anterior, la construcción estaba á cargo del Directorio de Córdoba, y por mi proyecto se encarga á una comisión de respetables vecinos de Tucumán, porque ellos tendrán más aptitud para conocer el precio ó costo de los materiales que haya necesidad de comprar para hacer este trabajo, y en mejores condiciones que el Directorio que tiene á su cargo la administración del Ferrocarril Central, y ocupado su tiempo en esta ateneión.

Por estas razones y guiado principalmente por el deseo de que esta obra de tan grandes resultados para el país se lleve cuanto antes adelante, es que he presentado este proyecto, y espero que será apoyado por mis honorables colegas.

—Apoyado.

Sr. Presidente—A la Comisión de Hacienda.

Sr. Villanueva — Yo creo que este asunto debe destinarse á la Comisión del Interior.

Sr. Presidente — El Reglamento dispone que todo proyecto de ley que se refiera á obras públicas debe pasar á la Comisión de Hacienda; pero si el Senado resolviera otra cosa...

Sr. Villanueva—Posteriormente se ha modificado el Reglamento, y se ha nombrado una Comisión más, la del Interior, y á ella han pasado siempre todos los proyectos de esta naturaleza.

Sr. Presidente—En el Reglamento no está consignada la modificación á que se refiere el señor Senador, pero debo creer que es exacto lo que dice.

Sr. Argentó—Es práctica que pasen á la Comisión del Interior.

Sr. Presidente—Entonces, pasa á la Comisión del Interior.

La orden del día la forma un despacho de la Comisión de Hacienda, aconsejando la aprobación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que manda reconocer los depósitos de huano en las costas de Patagones, y el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales y Poderes, sobre los diplomas de los señores senadores electos por la Provincia de La Rioja.

Es de práctica, cuando hay diplomas á la consideración del Senado, tratarlos con preferencia, y entiendo que así debe hacerse con esta parte de la orden del día.

II

Sr. Pizarro—Antes de pasar á la orden del día deseo hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente—Tiene la palabra el señor Senador.

Sr. Pizarro — Señor Presidente: la obra del momento, la obra del día diré así, está terminada. Las trincheras de la rebelión han desaparecido, su ejército, vencido en los combates de Olivera, Puente Alsina y Corrales, se encuentra disuelto; el Gobernador y la Legislatura rebelde han desaparecido también.

la Provincia de Corrientes que secundaba este movimiento revolucionario ha rendido sus armas, obedece hoy á la autoridad nacional, y reorganiza sus poderes públicos, como la de Buenos Aires, que se prepara á reconstruirlos, en paz y libertad, bajo los auspicios de la intervención nacional.

Y aunque no se ha hecho todo lo que una política severa pudiera exigir, el Congreso de la Nación se ha elevado en la consideración y el concepto público, mereciendo el aplauso general en todos los pueblos de la República por la energía y previsión que ha manifestado en todos sus actos para abatir y dominar plenamente la rebelión.

Algo quedaría todavía que hacer en este sentido para dejar completamente restablecido el principio de autoridad en presencia de la rebelión.

La Legislatura de Buenos Aires, al disolverse en cumplimiento de la Ley del Congreso que la manda cesar en sus funciones, ha dado un Manifiesto que compromete seriamente el principio de autoridad nacional y ofende al más alto cuerpo político de la Nación.

La Legislatura rebelde se disuelve haciendo su último disparo contra el Congreso, á pesar de la política generosa y magnánima, á la vez que enérgica y previsora, desplegada por éste al reprimir con energía la rebelión, sin castigar á sus autores con todo el peso de las penas que las leyes tienen establecidas á este efecto.

La rebelión ha sido vencida y sus autores y cómplices perdonados, sin que un solo procedimiento se haya seguido contra ellos; y hoy la Legislatura rebelde se disuelve, denigrando en ese manifiesto al Congreso y al Gobierno de la Nación.

El Vicegobernador de la Provincia, por su parte, consiente en este acto en que se desconoce la autoridad del Congreso y del Gobierno para hacer cesar esa Legislatura, y puede decirse que lo autoriza, cuando después de promulgada y de comunicársele oficialmente la ley que la manda cesar en sus funciones, consiente que esa Legislatura se reúna y continúe funcionando, resistiendo así la ley que debía cumplir y acatar.

El Vicegobernador ha llegado hasta enviar á sus Ministros al seno de esa

Legislatura, después de habérsele, comunicado la ley que la manda cesar como rebelde, y esto importa continuar produciendo nuevos actos de rebelión contra la Nación, de parte de esa Legislatura y del Vicegobernador de la Provincia.

Dejar pasar en silencio tales actos importa dejar en pie y subsistente el espíritu de la rebelión, de que se manifieste así un nuevo germen que puede desarrollarse en lo sucesivo, y producir más tarde actos de este género, que son por el momento desconocidos y que es difícil indicar.

Estos actos, sin embargo, pasarán inapercibidos, y por esto decía, que si el Congreso y el Gobierno de la Nación con una política enérgica, á la vez que tolerante, han salvado la situación, y la tarea del día puede darse por terminada, no todo lo que pudiera hacerse se ha hecho.

Mucho deja todavía que desear en este sentido la política del Congreso á pesar de los aplausos con que ha sido recibida en todos los pueblos de la República.

Pero prescindiendo de estas consideraciones, que sólo he debido indicar ligeramente para prevenir actos posteriores que pueden llegar á ser indispensables en presencia de los hechos que he mencionado, y del desarrollo ulterior que ellos pueden tener más tarde. Otro es el objeto que ahora me propongo al usar de la palabra.

A pesar de cuanto puede decirse en aplauso del Congreso de 1880, comienzo á temer, señor Presidente, que el Congreso de 1880 ha de vivir poco tiempo en la memoria del pueblo argentino, si apartándose de la política que tiene iniciada con la mirada fija en el porvenir de la República, sólo se contrajera á estas cuestiones del día presente, y descuidara la más grave de todas, aquella que se refiere á la fijación de Capital permanente de la Nación.

Lo he dicho en sesiones anteriores y lo repito ahora: «Nada se ha hecho, mientras queda todo por hacer, y todo queda por hacer mientras no se haya resuelto la cuestión de Capital permanente de la República.»

Repito hoy estas mismas palabras, señor Presidente: «Nada se ha hecho mientras queda todo por hacer, y todo

queda por hacer mientras no se haya dado á la República su Capital permanente.»

Mientras esto no se haya verificado, nada importan los sacrificios hechos para dominar la rebelión; esos sacrificios serán estériles y los beneficios de la política del Congreso, que tanto le recomienda el concepto público, serán de utilidad transitoria y momentánea.

Nuevos hechos se producirán mañana reproduciendo la situación presente, ocasionados por la misma causa que ha producido hoy este trastorno general en toda la República; sino se la dota de su Capital permanente, sacando al Gobierno Nacional de la situación precaria, y librándole de las vicisitudes á que le deja entregado su asiento vacilante en una Capital sin jurisdicción propia y exclusiva.

Esto que es la gran cuestión; esto que es lo único que puede dar importancia histórica al Congreso de 1880, no lo debe perder de vista el Senado.

He consagrado personalmente á este propósito todos mis esfuerzos, hasta obtener que esta cuestión llegue á fijar la atención general, preocupando á los poderes públicos de la Nación. Un día conocerá el país importantes episodios y antecedentes á cerca de esto, que me propongo hacerle conocer por ligeros apuntes sobre los acontecimientos principales de esta época, y entonces sabrá como la cuestión de Capital permanente de la República ha llegado á ocupar á la prensa, al Congreso, al Gobierno de la Nación y de la Provincia, hasta el momento en que el Congreso se resolvió á pasar al Poder Ejecutivo la minuta de comunicación en que le encargaba que requiriese de los poderes públicos de la Provincia de Buenos Aires, en el término de quince días, la cesión de la ciudad de este nombre y su municipio para Capital permanente de la Nación.

Después de haber conseguido que el señor Presidente de la República, respondiendo á ideas que él mismo tenía anteladas y expuestas al Congreso en su discurso de clausura de las últimas sesiones, hiciese suya esta causa, y diese á la situación porque acaba de pasar el país, su verdadera importancia y significación política, esta cuestión ha llegado á dominar todos los espíritus y

á manifestarse por todos los órganos de la opinión, reconociéndose la necesidad de darle inmediata solución.

Es sabido que aquella minuta del Senado al Poder Ejecutivo ha motivado ciertos procedimientos y negociaciones con las autoridades de la Provincia para la fijación de la Capital en la ciudad de Buenos Aires; pero esto no ha pasado de conferencias privadas, de combinaciones personales que hasta ahora no se ven traducidas en un hecho oficial públicamente conocido.

El Senado, sin embargo, debe tener conocimiento oficial del resultado de aquellas negociaciones, y el Poder Ejecutivo ha debido dárselo, contestando á la minuta de comunicación que el Senado le pasó á este efecto.

Al recordarlo yo ahora me propongo dar ocasión al Poder Ejecutivo de cumplir este deber, de atención al menos, dando á conocer al Senado el resultado de aquellas negociaciones, para habilitarle así á proceder en este asunto resolviéndose de un modo ó de otro.

A pesar de que aquellas negociaciones no han dado resultado alguno, según se dice públicamente, es bueno que quede constancia de ello, y de que el Congreso hizo por su parte todo lo posible para dar solución conveniente á esta cuestión. Yo, á lo menos, estoy dispuesto á hacer en este sentido cuanto de mí dependa para conseguirlo, y de este modo habré descargado personalmente la parte de responsabilidades que puedan caberme por la posición que ocupo en esta Cámara; y quiero por lo tanto dejar consignado en sus actas que hice todo lo que mi capacidad y patriotismo me permitieron hacer para la resolución de esta gran cuestión de interés nacional.

Es por esto que vengo ahora á ocupar nuevamente la atención de la Cámara con este asunto sometiendo á su consideración los medios prácticos de resolver la cuestión, á pesar de no haber dado resultado las gestiones hechas cerca del Gobierno de la provincia para declarar Capital de la Nación á la ciudad de Buenos Aires y su municipio.

En el seno de la Comisión de Negocios Constitucionales integrada en sesiones anteriores con dos miembros más á moción mía, existen dos proyectos referentes á este asunto. El uno basado en la

prescripción del artículo 3.º de la Constitución Nacional que confiere al Congreso la facultad de designar la Capital permanente de la República; el otro que coloca la cuestión fuera de este terreno y encomienda su solución á una Convención Nacional, reformando el artículo 3.º de la Constitución.

Ambos son igualmente conducentes al propio objeto y pueden emplearse con éxito, en conjunto ó subsidiariamente.

Cuando el Senado en una de las sesiones anteriores resolvió dirigirse al Poder Ejecutivo encargándole gestionar cerca de las autoridades provinciales la cesión de la ciudad de Buenos Aires para Capital, se manifestaba dispuesto á resolver inmediatamente la cuestión empleando el primero de los medios indicados. A esto respondía la designación del perentorio término de quince días que se señalaban para la cesión constitucional de la ciudad de Buenos Aires. El Senado se disponía entonces á tratar el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, y declarar por sí inmediatamente cuál ha de ser la Capital, si pasados aquellos quince días no se hubiera obtenido la cesión de Buenos Aires, ó fijarla en esta ciudad inmediatamente de obtenida.

El Senado se encontraba entonces bajo la influencia de los acontecimientos de actualidad; sentía los males que produce la falta de Capital permanente; estaba dominado por el sentimiento de esta necesidad suprema y se disponía á resolver inmediatamente la cuestión, hoy mejor que mañana. Las horas le parecían días, los días meses y los meses años, y trataba de economizar el tiempo en lo posible, contando por instantes los minutos.

El Senado colocaba entonces la cuestión en esta disyuntiva: ó en el término de quince días ha obtenido éxito feliz esta negociación, y el Congreso queda habilitado para fijar la Capital de la República en esta ciudad de Buenos Aires; ó, por lo menos queda en caso contrario habilitado para darle cualesquiera otra resolución que en su prudencia y patriotismo encuentre conveniente.

El tiempo ha ido pasando, y á medida que han ido desapareciendo las dificultades de la situación y los inconvenientes que la resolución presentaba, parece

que comienza á sentirse menos la necesidad de resolver inmediatamente esta cuestión y que se relaja la disposición del Senado en este sentido, alejándolo poco á poco de aquel primer propósito, tan vivamente manifestado cuando se encontraba bajo el peso inmediato de los males producidos por el estado en que han permanecido hasta hoy las autoridades de la República sin un asiento fijo y permanente que dé estabilidad y fuerza al Gobierno.

Es así como ha nacido más tarde la idea de fijar la Capital por medio de una Convención que reforme el artículo 3.º de la Constitución, alejándose al Senado de aquel primer propósito. Yo subscribí esta idea como subscribí también, ó mejor dicho, provoqué el anterior procedimiento de dirigirse por una minuta al Poder Ejecutivo para obtener la cesión de Buenos Aires para Capital, porque, en mi concepto, todos estos medios son buenos, siempre que se llegue al resultado apetecido.

Pero observo que aquel primer expediente parece ya completamente abandonado y que hoy sólo se piensa en la Convención de que muchos se han declarado paladines ardientes. Esto, séame permitido decirlo, señor Presidente, no importa en el fondo otra cosa que un acto de debilidad para alejar la responsabilidad que pudiera imponer al Congreso la resolución directa de la cuestión de Capital por el Congreso mismo, cuando no importe entorpecer, ó imposibilitar la solución misma de esta cuestión que debía y debe ser inmediata, satisfaciendo las exigencias públicas y los deberes que el patriotismo impone. Se trata así de declinar en la Convención esta responsabilidad y ni para la convocatoria de la Convención hay resolución firme y propósito decidido.

No veo, señor Presidente, que hoy la idea misma de convocar una Convención á este objeto palidece y se decolora de día en día. Pocos son ya los que se atreven á sostenerla y se empeñan en realizarla, ni aun aquellos mismos que fueron sus autores. Padres desnaturalizados dejan hoy los autores de este proyecto en la horfandad y la miseria á este débil hijo de sus convicciones políticas, en brazos extraños diré así, sin prestarle el más ligero apoyo y protección para que cobre vida y robustez.

Pero es necesario que esta cuestión se resuelva, al fin, de un modo ó de otro. Es necesario resolverla alguna vez, y no dejar pasar otros veinte años como han transcurrido desde la reforma de la Constitución sin que el Congreso la haya resuelto definitivamente, dando á la Nación su Capital permanente.

Hay sobre esto un hecho histórico que quiero recordar, vindicando para la provincia que represento el honor de su empuje tenaz y constante por dotar á la Nación de su Capital propia, por medio de sus representantes en el Senado. Ellos han demandado é instado de año en año la solución de esta cuestión. El señor Senador doctor Granel, primeramente, se hizo un deber de presentar anualmente á la solución del Congreso esta cuestión por proyectos de ley que reproducía á la apertura de sus sesiones. Sancionado en la Cámara de Diputados el proyecto á que antes me he referido, mi honorable colega por Santa Fe, doctor Argento ha venido á reemplazarle. El viene también de año en año repitiendo sus indicaciones para que la Comisión de Negocios Constitucionales despache ese proyecto que duerme largos años en su cartera. El último soy yo en esta tarea patriótica.

Mi honorable colega por Santa Fe ha repetido hasta dos veces por año sus recomendaciones á la Comisión de Negocios Constitucionales para que se despache aquel proyecto, y su insistencia ha sido hasta hoy ineficaz. El hizo esta recomendación cuando el Congreso comenzó á funcionar en Mayo del corriente año: estamos en Agosto y la Comisión nada ha hecho.—Por una razón ó por otra pasan los años y la Comisión no despacha ese proyecto. Yo hago justicia á los señores de esa Comisión al creer que puede haber sido tan difícil y complicada para ellos la resolución de este asunto que hayan creído necesario consagrarle tanto tiempo y tanto estudio para expedirse en él; pero, al fin, ello es verdad que, algún día hay que resolver esta cuestión, y que con ó sin estudio suficiente de esa Comisión se hace ya indispensable que el Senado la resuelva.

La comisión especial que últimamente nombró el Senado para que se expidiese sobre los proyectos presentados, ha en-

carecido la necesidad de estudiar todavía esa cuestión, contestando á la indicación de mi colega por Santa Fe para que nos presentara su dictamen. Si la Comisión ha de dedicar á este asunto mayor estudio, es necesario, por lo menos, que se determine un plazo cualquiera dentro del cual haya de expedirse y la Comisión se sienta en el deber de expedirse y presentar á la Cámara su dictamen.

Es necesario que la Comisión se aperceba que no está en su mano retardar indefinidamente la resolución de este asunto, y que debe, al fin, expedirse de un modo ó de otro en un término dado.

Y cuando este término haya transcurrido, si la Comisión no ha podido expedirse sobre el asunto preciso es que el Senado se avoque el estudio y constituyéndose en comisión lo resuelva por sí mismo sin levantar mano.

Yo creo, señor Presidente, que si el Senado se decide por adoptar el temperamento que señala el artículo 3.º de la Constitución al encomendar al Congreso la designación de Capital, no hay necesidad de obtener la cesión previa de la Legislatura para designar á la ciudad de Buenos Aires como Capital. El Congreso está habilitado, en mi opinión, para declarar á la ciudad de Buenos Aires Capital de la República aún sin la previa cesión de la Legislatura.

Esta opinión puede á primera vista parecer avanzada; pero me atrevo á creer, señor Presidente, que semejante juicio no es sino el resultado de erróneas y falsas ideas que se han adoptado como principios, y que sin reflexión ni estudio suficiente vienen transmitiéndose de tiempo atrás, y han llegado á formar una falsa conciencia pública en esta materia.

Yo creo fácil poder demostrar con las mismas disposiciones constitucionales que se invocan para sostener que la ciudad de Buenos Aires no puede ser declarada Capital de la República sin previa cesión de la Legislatura de la provincia, que esta cesión previa no es indispensable, y que las mismas disposiciones constitucionales que se invocan para sostener esa opinión, ofrecen elementos suficientes de convicción contraria; y no me parece difícil llevar este convencimiento á mis honorables colegas si se dignan pres

tar atención sobre este punto al breve estudio que voy á hacer sobre el texto mismo de la Constitución, y que acompañaré de breves doctrinas constitucionales para dar mayor autoridad á mis observaciones.

El artículo 3.º de la Constitución dice: «Las autoridades que ejercen el Gobierno Federal residen en la ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una ó más legislaturas del territorio que haya de federalizarse.»

Como se ve, la previa cesión á que el artículo tercero se refiere, es la *del territorio que haya de federalizarse*; pero la primera parte del artículo que habla de la ciudad en que las autoridades nacionales han de residir y que ha de declararse capital por una ley especial del Congreso, no está sujeta á esta *cesión previa*.

La primera parte del artículo establece neta y claramente, y sin restricción ni limitación alguna, ni dependencia la más mínima de la autoridad provincial, la facultad *exclusiva y soberana* del Congreso para declarar Capital de la República, por una ley especial, la ciudad en que hayan de residir las autoridades que ejercen el Gobierno Federal.

El artículo 3.º de la Constitución supone que una de las ciudades de la República ha de ser declarada Capital, y servir de residencia á las autoridades que ejercen el Gobierno Federal, y la designación de la ciudad que ha de servir de Capital debe ser *por una ley del Congreso*.

Pero fácilmente se comprende que un gobierno encerrado en el estrecho recinto de una ciudad, que puede ser pequeña, reducida, de escasa población y de elementos escasos, tendría que ser un gobierno débil, vacilante, sin suficiente base de autoridad y de gobierno, el que no respondería así á las exigencias de un Gobierno Nacional, al cúmulo de atribuciones y al inmenso peso de los deberes que la Constitución le impone.— Se comprende entonces, que la Constitución pensara en dar á la ciudad que se declare Capital, un territorio en que pudiera desenvolverse y ser con el tiempo un gran pueblo que presentase asiento proporcional al Gobierno de la Nación. Este objeto viene el segundo

inciso del artículo 3.º de la Constitución, cuando después de decir que «Las autoridades que ejercen el Gobierno Federal residen en la ciudad que se declare Capital por una ley del Congreso», agrega que la *cesión del territorio que ha de federalizarse*, desmembrándolo de la Provincia para incorporarlo á la Capital designada por el Congreso, debe hacerse *previamente* por una ó más de sus Legislaturas.

Y esto, señor Presidente, se establece así, por que este artículo se relaciona con otro de la Constitución por el cual se garante á cada Provincia la integridad de su territorio, y se declara que no podrá ser dividido, ni de dos provincias hacerse una sola, ni dividirse una en dos, suprimiendo completamente una provincia ó menguando por la división ó el fraccionamiento su importancia política.

Es, pues, con relación al *territorio* que haya de federalizarse; con relación simplemente al *territorio* y no á la ciudad; es con relación al *territorio* que se pretende incorporar á la ciudad Capital, segregándolo del de la Provincia en que aquella se encuentra; es al *territorio* simplemente, á lo que se refiere la *previa cesión* de la Legislatura de Provincia; pero nunca, jamás, á la ciudad que ha de declararse Capital y que puede ser lo cualquiera de las ciudades de la República en virtud de la sola ley del Congreso.

De otra suerte, la fijación misma de la Capital no sería hecha por la ley del Congreso, sino por la ley de la Legislatura, en cuyo poder quedaría hacer que la ciudad designada por el Congreso fuese ó no Capital de la República.

Tratando con especialidad de la ciudad de Buenos Aires, debo decir señor Presidente, una cosa que á primera vista va á parecer paradoja: la ciudad de Buenos Aires no pertenece á la provincia de Buenos Aires!

Esta ciudad no pertenece á la provincia de Buenos Aires: es una ciudad esencialmente nacional, eminentemente nacional, exclusivamente nacional.

Lo ha sido en todo tiempo, ella ha pertenecido siempre á la Nación y no puede reputarse como perteneciente á la provincia.

Capital del Virreinato en la época colonial, Buenos Aires, no constituía en-

tonces una provincia, de suerte que en su capacidad política de tal, pudiera conceptuarse que la ciudad Capital del Virreinato era una ciudad perteneciente á la provincia de Buenos Aires. Proclamada la independencia, no en nombre de la soberanía local, sino en nombre de la soberanía nacional, y llevada esta á feliz término por la voluntad y el concurso de los pueblos todos de la República, lo que antes perteneció al Reino ó á la Corona de España, pasó á ser de la Nación emancipada, y de esta suerte la ciudad de Buenos Aires vino á ser una ciudad de la Nación y no de la Provincia.

El Gobierno patrio se constituyó desde luego en la ciudad de Buenos Aires que había sido Capital del Virreinato, y de esta suerte la ciudad de Buenos Aires, sin pertenecer un solo instante á la Provincia de este nombre, pasó á ser Capital de la Nación, y fué desde ese instante una ciudad eminentemente nacional, exclusivamente nacional.

Era un territorio nacional donde había ejercido su jurisdicción el Virrey en nombre y por autoridad del Rey de España, y donde ahora reside el Gobierno de la Nación independiente y ejerce su jurisdicción en nombre y por autoridad del pueblo argentino, en nombre y por autoridad de la Nación misma.

Si seguimos estudiando las diferentes épocas de nuestra historia, posteriores á la emancipación, la ciudad de Buenos Aires se presenta siempre como una ciudad perteneciente á la Nación y no á la Provincia. En ella ha residido siempre el Gobierno de la República, y la Nación ha ejercido jurisdicción constante en ella, siendo en todo tiempo la Capital, aun en la época de la disolución nacional, de la desmembración y del aislamiento de los pueblos.

Durante esta época no hay un solo acto por el cual pueda decirse que la ciudad de Buenos Aires, ciudad eminentemente y exclusivamente nacional antes y después de la presidencia de Rivadavia, haya dejado de serlo, pasando á ser dependencia de la Provincia de Buenos Aires. Aun en la larga noche de la tiranía y de la guerra civil, y en medio de la dispersión ó segregación de los pueblos de la República, en que el Gobierno propio de la provin-

cia de Buenos Aires, tuvo su asiento en aquella ciudad, dejó de ser ésta, capital de la República, y de ejercer la Nación jurisdicción en ella. Era el gobierno de Buenos Aires residente en esta ciudad quien tenía la representación exterior de la Nación entera, y era la Nación quien de esta suerte ejercía jurisdicción en ella, en lo que constituía entonces nuestra vida nacional.

Después de la caída de Rosas, en que comenzó la reconstrucción nacional, los sucesos de la época impidieron momentáneamente que la Nación ejerciera jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, y que esta continuara siendo, como había sido siempre, Capital de la República, una dependencia de la Nación.

Debo recordar que la aparición de las provincias en su capacidad política de estados independientes, posterior á nuestra emancipación, no fué jamás claramente definida y precisada hasta esta época en que organizándose la Nación bajo el régimen federal, debían aquellas tomar su carácter propio, definido por la Constitución. Buenos Aires existía entonces de hecho como provincia y rehusó hacerse representar en el Congreso que debía darle este carácter definido por una Constitución General, y que declaró también entonces á la ciudad de Buenos Aires Capital de la Nación.

Esta ciudad continuaba así siendo siempre de la Nación y no de la Provincia de Buenos Aires.

Pero Buenos Aires resistió esta declaración de la Capital en Buenos Aires, como resistió otras muchas disposiciones de aquella Constitución que se había dado al país sin estar representada en el Congreso, y sostuvo la necesidad de revisarla y reformarla para incorporarse de nuevo á la Nación.

La Constitución fué reformada en este como en muchos otros puntos, suprimiéndose la declaración que en ella se hacía de ser la ciudad de Buenos Aires la Capital de la Nación, y encomendando por la nueva Constitución al Congreso Legislativo la designación de Capital definitiva.

Esto fué el resultado de las exigencias de aquellos tiempos y de los nuevos intereses políticos que entonces se despertaban sobre este particular. No

se declaró entonces que la ciudad de Buenos Aires no fuera nacional, ni tampoco que no pudiera ser declarada Capital de la República. Por esa época había ya nacido la ciudad del Rosario y la del Paraná había servido de Capital provisoria despertando nuevos intereses en este sentido al otro lado del Arroyo del Medio; aspirando varias provincias al honor de traer á su seno al Gobierno de la República.

Fué en esta situación y en presencia de estos encontrados intereses que se dijo entonces, á fin de evitar sobre este punto la lucha y los inconvenientes que podían obstar á la incorporación de Buenos Aires: «Nada resolvamos sobre Capital. Eliminemos esta causa poderosa de disidencias en el acto mismo de sellar la integridad nacional por la incorporación de Buenos Aires. Es esto peligroso por la situación porque atraviesa el país. Dejemos que el Congreso, después de la incorporación de Buenos Aires, fije con espíritu tranquilo la Capital de la República, ya sea en la ciudad de Buenos Aires si así lo creyere conveniente, ya sea en otra parte.»

Este es el origen del artículo 3.º de la Constitución Nacional, y esta su importancia y su sentido histórico y político cuando establece que—«Las autoridades que ejercen el Gobierno Federal residen en la ciudad que se declare Capital por una ley especial, *previa cesión hecha por una ó más legislaturas del territorio que haya de federalizarse.*»

La ciudad de Buenos Aires no dejaba así de ser nacional. «No se declaraba Capital, pero no se excluía de serlo. Podría serlo cualquier otra y haber necesidad de federalizar eienta parte del territorio de Buenos Aires ó de otra Provincia, lo que podría comprometer la importancia y significación política de ella por una desmembración considerable, y entonces se dijo: *previa cesión hecha por una ó más legislaturas del territorio que haya de federalizarse.*»

Esta segunda parte del artículo 3.º de la Constitución, responde así á otro pensamiento distinto del enunciado en la primera, al hablar de la ciudad que ha de designarse para Capital.

La segunda parte del artículo 3.º se refiere á otra disposición constitucional que he mencionado ya y se relaciona

también con otro artículo de la misma Constitución á que voy á referirme.

El artículo 67 en su inciso 14 encomienda al Congreso la facultad de arreglar definitivamente los límites del territorio nacional, *fixar los de las provincias*, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la administración, organización y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites *que se asignen á las provincias*.

Los límites interprovinciales son, por este artículo indeterminados, y corresponde al Congreso *asignar á cada provincia sus límites propios*.

Mientras estos límites interprovinciales no se designen, y se comprenda en los de la Provincia de Buenos Aires la ciudad de este nombre, no hay razón para decir que sea de la provincia esta ciudad que ha sido en toda época territorio nacional, Capital de la Nación bajo todos los gobiernos patrios, y antes de ellos Capital del Virreynato. Ella continúa siendo una dependencia de la Nación y no de la provincia, pues hasta este momento no hay ley alguna del Congreso que la declare incluida, contra todas estas indicaciones históricas y jurídicas, en los límites provinciales de la última.

Estamos pues, en presencia de esta situación: una ciudad ó territorio nacional en el que puede y debe fijarse la Capital permanente, sin que, por lo tanto, se requiera para esto en manera alguna la previa cesión de la Legislatura de esta provincia, por lo mismo que no es una dependencia suya, una fracción de su territorio, sino un territorio nacional, la ciudad Capital del Virreynato, la ciudad Capital bajo el gobierno patrio en la época de nuestra emancipación; la Capital del Gobierno de la Nación en todo tiempo; una ciudad, en fin, eminente y exclusivamente nacional bajo todo concepto.

El gobierno y administración de esta ciudad corresponde pues al Congreso, en virtud del artículo de la Constitución que vengo examinando y que se le confiere sobre todo territorio nacional, sobre todo territorio no comprendido en los límites de una provincia.

Todo esto, señor Presidente, es una paradoja, una quimera para los que

creen que la existencia de las provincias como entidades políticas, es anterior á la de la Nación, y hacen derivar de ellas la Nación unida; pero deja de serlo para los que consideran á las provincias como meras demarcaciones domésticas para el gobierno interior de la República, y piensan que la Nación es anterior á ellas, y que las provincias sólo existen por la Constitución como dependencias suyas, con los límites que les designe el Congreso.

Estas ideas son todavía nuevas; estamos educados en la vieja escuela que considera á las provincias como el elemento de que se forma la Nación por un convenio ó pacto de que derivan las atribuciones del Gobierno General, en virtud del cual subsiste la Nación misma, pero la Constitución aunque reconoce la existencia de las provincias é impide que puedan suprimirse, ó fraccionarse en su territorio, las considera como meras demarcaciones internas para el gobierno doméstico y encomienda al Congreso arreglar sus límites interprovinciales, dándole facultad de designarlos, y de fijar así los territorios que han de permanecer exclusivamente nacionales.

Si todo esto es cierto y no puede negarse que la ciudad de Buenos Aires ha sido en todo tiempo la Capital de la Nación, corresponde, una vez que se reconozcan los hechos que he indicado, los antecedentes históricos que he recordado y que fundan el derecho de la Nación sobre la ciudad de Buenos Aires, ejercer en ella plena jurisdicción, ya como territorio nacional, en virtud del inciso 14 del artículo 67 de la Constitución, ya como Capital de hecho y de derecho de la República, en virtud del inciso 27 del mismo artículo, que confiere el Congreso la facultad de ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Nación, y sobre los demás lugares adquiridos por compra ó cesión en cualquiera de las provincias para establecer fortalezas, arsenales ú otros establecimientos de utilidad nacional.

En virtud de este *derecho de legislación exclusiva* del Congreso sobre los territorios nacionales, y sobre todo el territorio de la Capital, el Congreso puede, sin previa cesión de la Legislatura

de Buenos Aires, declarar Capital de la República á la ciudad de este nombre, confirmando el hecho histórico, el derecho de la Nación en la Capital de hecho y de derecho para la República.

Es así como todos estos artículos constitucionales se eslabonan con el 3.º de la Constitución, cuando dice que las autoridades que ejercen el Gobierno Federal residirán en la ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, dándole jurisdicción plena y absoluta para declarar Capital cualquiera ciudad de la Nación, y con mayor razón la ciudad de Buenos Aires que pertenece solo á la Nación.

Creo, pues, que en virtud de estas observaciones, que más adelante se verán robustecidas por la doctrina de eminentes constitucionalistas para dar á mis palabras la autoridad de que carece, la Comisión del Senado se encuentra habilitada para despachar desde luego el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, designando la Capital con sujeción al artículo 3.º de la Constitución, y que se encuentra así en aptitud de despachar ese proyecto declarando inmediatamente á la ciudad de Buenos Aires Capital de la Nación, sin esperar la *sesión previa* de la Legislatura de esta provincia.

La Comisión del Senado está así en condiciones de optar entre los expedientes propuestos, resolviendo inmediatamente esta cuestión, si lo desea; ya sea que adopte el temperamento de convocar una Convención Nacional para la reforma del artículo 3.º de la Constitución y la consiguiente designación de Capital por la Convención misma, ya sea que opte por la designación de esta, con arreglo al citado artículo, hecha por el Congreso mismo en la ley especial á que este artículo se refiere.

La Comisión del Senado puede todavía hacer más, y combinando en un solo proyecto el venido de la Cámara de Diputados, con el que hemos tenido el honor de presentar con varios de mis honorables colegas para la convocatoria de la Convención, puede adoptar á la vez uno y otro temperamento, despatchándolos conjuntamente. Si la Comisión del Senado ó la mayoría de los miembros de este no encuentran aceptables las ideas que acabo de exponer y

creen que para declarar Capital de la Nación á la ciudad de Buenos Aires, es indispensable la cesión de ella por la Legislatura de esta provincia, la ley que resolviese esta importante cuestión podría combinar todas las opiniones y temperamentos diciendo: «Declárase Capital de la República á la ciudad de Buenos Aires, debiendo la Legislatura de esta provincia hacer la cesión de que habla el artículo 3.º de la Constitución, en el término tal, pasado el cual sin que se haya obtenido esa cesión se convocará una Convención Nacional para que reforme el artículo 3.º de la Constitución y designe la Capital de la República.» etc., etc.

Todo esto puede hacerse, señor Presidente, y para mí son buenos todos los caminos que conduzcan al término de dar Capital á la Nación. Los expedientes propuestos y que están al estudio de la Comisión, no se excluyen, antes bien se complementan y prestan recíproco auxilio uno á otro, y todo consiste en hacer del uno el suplementario y auxiliar del otro.—El expediente indicado, de convocar una Convención Nacional para designar la Capital de la República es bueno y es tan autorizado por la Constitución como el que establece el mismo artículo 3.º que encomienda á una ley del Congreso la designación de aquella. Uno y otro expediente son buenos y pueden armonizarse en la forma que acabo de indicar.

La Comisión, pues, tiene todo género de facilidades para la inmediata solución de este asunto, y el Congreso adoptando los dos temperamentos propuestos en la forma que acabo de indicar, se habrá colocado á la altura de las exigencias de la situación, y puesto esta cuestión en términos de que no pueda dejar de resolverse inmediatamente, satisfaciendo así, en las presentes sesiones, las más altas aspiraciones del país y la mayor de las conveniencias públicas para la Nación.

Algunos han dudado si es conforme á la Constitución y aceptable, por lo tanto la convocatoria de una Convención para la designación de Capital, después de establecer aquella por el artículo 3.º que la designación se hará por una ley del Congreso. Dudan, pues, al

ción constitucional puede designarse la Capital por una Convención, y si este temperamento para la designación de la Capital no viene á ser así inconstitucional.

Yo no lo reputo así, señor Presidente, y creo que el expediente es tan constitucional como el que inmediatamente se relaciona con el artículo 3.º de la Constitución, dado que otro de los artículos de la misma, autoriza la reforma constitucional en todo ó en parte, y sería en virtud de esta última disposición que se reformaría el artículo 3.º y que la Convención Nacional haría la designación de Capital.

Por lo demás, comprendo que no me será dado en un día hacer prevalecer las ideas que he manifestado al sostener que con arreglo al mismo artículo 3.º de la Constitución, puede el Congreso designar desde luego la ciudad de Buenos Aires, ó cualquiera otra para Capital de la República. Esta doctrina será para nosotros, educados en distintas escuelas, una utopía durante mucho tiempo, pues estamos familiarizados con la teoría que hace derivar de las Provincias la existencia de la Nación como resultado de un pacto ó convención entre ellas, siendo así que la Nación es anterior á las mismas.

Si en presencia de aquella falsa y errónea teoría ha de interpretarse el artículo 3.º de la Constitución, de suerte que hubiera de tener el sentido que vulgarmente se le dá; si para la fijación de Capital permanente de la República fuera necesario que la ley especial del Congreso revistiera el asentimiento previo de la Legislatura en que se encontrara la ciudad que ha de designarse como Capital, aquella ley del Congreso no sería una ley, pues no obligaría á ninguna provincia, ni aun podría el Congreso dictarla desde que para esto sería indispensable la cesión previa ó el previo consentimiento de la Legislatura de provincia.

La Nación se vería así obligada á vivir en completa dependencia de las provincias, sin que hubiera medio de terminar la organización definitiva del país.

La soberanía nacional quedaría de esta suerte subordinada y sujeta á la soberanía local, y el Congreso á las Legislaturas de Provincias.

Esto, á mi juicio, es un contrasentido, un absurdo.

Si tal fuera el sentido del artículo 3.º de la Constitución, diría que esa disposición constitucional es el mayor contrasentido que pudiera haberse ocurrido á nuestros primeros hombres públicos en la Convención Constituyente, y que apenas se explicaría el espíritu ó la mente que les guió cuando de esta suerte pretendieron subordinar la suprema voluntad de la Nación, la suprema autoridad de la Nación, á la buena ó mala voluntad de un gobierno local, á la buena ó mala voluntad de una Legislatura de Provincia.

Esto no se puede comprender, señor Presidente, y esto abona la inteligencia que he dado al artículo 3.º de la Constitución.

Ridículo sería que el Congreso dictase una ley declarando esta ó aquella ciudad Capital de la República, y que esta ley suprema del país, dada por el más alto poder legislativo de la Nación, en nombre de la autoridad y de la soberanía nacional, no fuera sino una irrisión que pudiera burlar el más menguado interés de un hombre, de un círculo, de una Legislatura de Provincia.

Esto es contrario al artículo 108 de la Constitución que declara ser la Constitución y las Leyes que en su conciencia diete el Congreso la ley suprema del país.

Esto es un absurdo, un contrasentido que vendría á dejar sujeto y subordinado el todo á la parte, el pueblo argentino, la Nación, la Patria, á la Provincia, lo que es contra todo buen sentido contra todas las leyes de la lógica.

Esta no puede ser, por lo tanto, la inteligencia, el alcance que nuestros constituyentes pretendieron dar al artículo 3.º de nuestra ley fundamental.

Ahora, para demostrar esto por la autoridad de los constitucionalistas, y para demostrar también la procedencia constitucional del proyecto referente á la Convención, de que he hablado, voy á permitirle leer algunas páginas de este libro, que autorizan las observaciones que dejo hechas en el comentario del artículo 3.º de la Constitución:

§ 76 Cuando el pueblo instituye un gobierno y le confía la ejecución de la autoridad pública, no por eso se despoja ni en modo alguno restringe su

soberanía inherente.—Esta es inalienable. En la institución del gobierno crea meramente un cuerpo ó persona para confiarle la ejecución de su autoridad, en la extensión y manera por el prescripto en la Constitución; y cuando el Gobierno tiene, de esta manera, á su cargo la ejecución de la autoridad pública, está no obstante sujeto á esa soberanía que le dió el ser.»

No se puede, pues, dudar del derecho con que pudiera ocurrirse á la soberanía del pueblo en la convocación de una Convención Nacional para la reforma del artículo 3.º de la Constitución, y designación de la Capital de la República por la Convención misma.

§ 77 Como la soberanía es la autoridad y poder supremo para el cual un estado se gobierna, ó implica el derecho de mandar en último resort, se sigue que, como atributo de la sociedad civil solo puede estar adherida al pueblo considerado como un todo ó nación; y no como una porción limitada ó mitad de una nación, porque como las más vastas sociedades de hombres asociados civilmente, constituyen las naciones, y como la más alta autoridad pública que debe ejecutarse por el gobierno civil pertenece á la Nación, se sigue que la autoridad de la nación debe ser soberana dentro de sus límites territoriales; es decir, que, no puede estar sujeta á cuestión ó resistencia por ninguna otra legítima autoridad.»

§ 78 La necesidad que requiere que el pueblo de una nación tenga autoridad soberana en todas las materias pertenecientes al bienestar general, es incidente á la existencia nacional. Así, la soberanía es un atributo necesario de toda nación—atributo que está inherente en el pueblo en su carácter nacional. El pueblo de los Estados Unidos como nación, posee ese atributo necesario, y por lo tanto, tiene autoridad soberana dentro de sus límites territoriales sobre todas las materias de interés general.»

§ 79 Esta soberanía pertenece al pueblo de los Estados Unidos como conjunto de ciudadanos nacionales solamente, y no de ningún otro gobierno. No puede haber soberanías separadas é independientes dentro de los mismos límites ó jurisdicción, ni puede haber dos orígenes distintos y separados de autoridad soberana dentro de la misma ju-

jurisdicción. El derecho de mandar en último resorto sólo puede hacerlo un cuerpo de población que habita el mismo territorio y solo pueden ejecutarlo los que tienen á su cargo la ejecución de esta autoridad».

§ 80 El pueblo de los Estados Unidos como nación tiene autoridad suprema dentro de los límites territoriales de la Nación sobre todas las materias pertenecientes al bienestar general, y tiene autoridad para determinar quién y de qué modo ha de ejecutarse la autoridad pública; qué derechos, deberes y poderes han de pertenecer al Gobierno Nacional y cuáles á los gobiernos de los Estados.»

§ 81 Pues que la autoridad soberana esencial al establecimiento y mantenimiento de un gobierno nacional es inherente y permanece en el pueblo de los Estados Unidos, él está autorizado á establecer un gobierno nacional en la forma y con los poderes que crea más conveniente al bienestar general. Y tiene asimismo autoridad para establecer gobiernos de estado ó investirlos de la ejecución de la autoridad pública que tenga por conveniente; y en virtud de la misma soberanía puede á su arbitrio ensanchar ó restringir los límites de la autoridad de estado ó nacional.»

§ 82 La soberanía como atributo del pueblo de los Estados Unidos como nación, excluye igual soberanía en el pueblo de un simple estado, considerado, meramente como reunión de ciudadanos de estado. Así la autoridad de un ciudadano en su carácter de miembro constituyente de la nación, es superior á la autoridad que tiene como miembro constituyente de un mero estado ó territorio. Así, cuando la nación confiere al gobierno nacional autoridad exclusiva sobre una clase dada de asuntos, el pueblo de un estado particular no tiene poder legal para cuestionar ó negar tal concesión, aunque esto invada lo que antes perteneció á su jurisdicción peculiar.»

Tales son los principios fundamentales de la obra de Tiffanny, sobre el Gobierno y derecho Constitucional de Estados Unidos. Esta es también la doctrina fundamental de la escuela constitucionalista moderna que hace derivar el Estado, ó Provincia de la Nación, en

contraposición á la escuela antigua que deducía la existencia nacional de una Convención ó pacto, y delegación de atribuciones y facultades dadas por las Provincias ó Estados para la existencia del gobierno nacional y de la Nación misma.

El Senado me permitirá que ocupe todavía algunos instantes su atención con esta lectura. Sabe que no acostumbro á molestarlo con lecturas y es poco lo que voy todavía á leer.

§ 68 Cuando el pueblo de las Colonias americanas, dice el mismo Tiffanny, (y aquí es bueno observar que con mayor razón debe esto entenderse de las Colonias Sudamericanas) promulgó su independencia, tuvo necesidad de unirse para proveer á su defensa común, promover su bienestar general y asegurar para sí y para su posteridad los beneficios de la libertad civil. Esta necesidad fué la justificación de su autoridad para establecer por sí una existencia nacional independiente; y habiendo tenido éxito en la empresa se hizo una nación *de acto* y habiendo sido reconocida su independencia se hizo una nación *de jure*.

§ 69 La independencia americana fué proclamada en nombre y por autoridad del pueblo de las colonias; fué establecida por su poder unido, obrando bajo un jefe ejecutivo común, y obedeciendo á una autoridad legislativa común; fué reconocida por las naciones como una acción del pueblo de todas las colonias; por consiguiente, *la nacionalidad estaba adherida á ellas en su capacidad colectiva de un solo pueblo que constituye una nación, y no de trece pueblos que constituyen trece naciones.*

§ 70 Haciéndose el pueblo de las Colonias Americanas una nación *de facto* y *de jure*, por el establecimiento de su independencia, y por el reconocimiento de la misma en la familia de las naciones, tuvo autoridad soberana para establecer el gobierno que juzgó esencial á la protección, seguridad y prosperidad del *pueblo americano, como nación*; (aquí pudiéramos leer *del pueblo argentino como nación*); luego hubo autoridad para instituir una confederación de los estados y confiarle la ejecución de la autoridad pública; ó para establecer un gobierno nacional del pueblo, subordinando á él á los gobiernos de los estados.»

§ 71 Siempre que el pueblo instituye un gobierno para confiarle la autoridad

pública, la autoridad de tal gobierno tiene que derivarse del pueblo en quien la soberanía está inherente; y en la institución y dotación de este gobierno, la nación confirma necesariamente su autoridad para crear, dotar y revocar á su autojo. Luego, habiendo probado la forma de un gobierno confederado, y visto que no bastaba á las necesidades de una nación soberana, hubo autoridad para abandonarla é instituir un gobierno nacional del pueblo; y para confiarle la ejecución de la autoridad pública como lo creyó mejor.

§ 72 Antes de la revolución americana, los ciudadanos de las colonias americanas no reclamaron ser súbditos nacionales de ningún otro gobierno que el de la Gran Bretaña. Luego cuando intentaron sacudirse de la obediencia á la corona británica, pensaron obrar en virtud de su autoridad original como hombres, y no como ciudadanos de ningún gobierno. Repudiaron su obediencia y su nacionalidad por la corona británica, para adquirir por sí mismos una nueva nacionalidad.»

§ 73 Como el pueblo de las diversas colonias estaba unido en la afirmación de su independencia y unidamente la adquirió; y como unido pidió el reconocimiento y fué reconocido como nación; sólo pudo invocar y ejercer la autoridad nacional como ciudadano de la nación.—Como ciudadano de una colonia ó Estado separado, no tuvo derecho á la autoridad nacional, ya fuese por la necesidad del caso, ya por el asentimiento del pueblo americano. Luego ni el pueblo de una colonia separada, ni su gobierno, tuvo autoridad alguna para fundar por sí una nacionalidad separada, ni para ejercer las prerrogativas nacionales en derogación de la soberanía común del pueblo Americano.»

Todo esto, señor Presidente, funda mis opiniones anteriores, por más que ellas puedan parecer aventuradas ó paradojales cuando he llegado á decir que la ciudad de Buenos Aires, no es de la Provincia de Buenos Aires, sino de la Nación; y que el Congreso puede declarar Capital de la República á esta ciudad, sin necesitar para ello la cesión de la Legislatura.

Fué el pueblo argentino quien se constituyó en nación, y no el pueblo de

las provincias quien hizo la nación. Es de la soberanía nacional que derivan las soberanías de provincia, creadas por la Nación misma, y no anteriores á ella. Fué la soberanía nacional quien instituyó las soberanías locales, y no fueron las soberanías locales quienes crearon la nación.

Es esta la razón porque he dicho: el territorio en que está asentada la ciudad de Buenos Aires es eminentemente nacional, y mientras una ley no lo declare comprendido en el territorio de la provincia, él continúa siendo nacional, porque fué en nombre del pueblo argentino, en nombre de la Nación Argentina, que se efectuó su independencia de hecho y derecho quedando de hecho y de derecho la ciudad Capital del Virreynato como ciudad Capital de la Nación.

Es fundado en estos mismos principios que la Constitución autoriza á declarar Capital de la República cualquiera de sus ciudades, si ella hubiese de salir de Buenos Aires. La Constitución limita en esto las soberanías locales, con un fin nacional, con un objeto de interés general y considera como territorio nacional el que ocupan todas las ciudades de la Nación.

Es fundado en estos mismos principios que la Constitución declara que el Congreso tendrá la facultad de designar los límites interprovinciales; porque reconociendo á la Nación como entidad principal de que derivan estas autoridades pequeñas y secundarias que se llaman provincias, considera nacional todo territorio comprendido dentro de los límites de la Nación, á excepción de los que se declaran por el Congreso pertenecer á las provincias al designar los límites interprovinciales, deslindándolos así unos de otros, y de los territorios que habrán de continuar siendo territorios nacionales.

Este es el mecanismo de la Constitución que reconoce á las provincias su existencia política en el gobierno de la Nación á objetos puramente internos del gobierno doméstico, garante su existencia y declara que de dos provincias no se podrá hacer una sola, ni de una dos; pero declara que el Congreso designará por una ley especial la ciudad en que han de residir las autoridades

que ejercen el Gobierno Federal, da al Congreso facultad para designar los límites *interprovinciales*, y declara que el territorio adyacente á la ciudad que se declare Capital, *sin previa cesión* de las legislaturas locales, deberá ser cedido por una ó más legislaturas, declarando desde luego provinciales estos territorios la misma Constitución que sólo confiere al Congreso en esta materia, la facultad de designar los límites *interprovinciales*.

Así pues, en conformidad con las disposiciones de la Constitución y principios y doctrinas que he mencionado, creo haber demostrado que el Congreso puede sin inconveniente alguno resolver por sí mismo la cuestión de Capital permanente de la República, adoptando cualquiera de los proyectos que están al estudio de la Comisión del Senado, y aun combinándolos entre sí, ya sea que se piense que el Congreso debe designar por sí mismo la Capital, ó que esta designación debe hacerse por una Convención, y ya tengan ó no aceptación las ideas que acabo de emitir y que se crea ó no que el Congreso pueda dictar la ley de Capital con ó sin previa cesión de las legislaturas de provincia.

Hago pues, moción á este objeto ó interés el patriotismo de mis honorables colegas para que me presten el apoyo que necesito, á fin de que se emplace á la Comisión Especial, á cuyo estudio están encomendados estos proyectos, para que se expida sobre ellos en un término dado que el Senado habrá de indicar, y pasado el cual éste se avocará el asunto y lo estudiará por sí mismo constituyéndose en Comisión.

Interpelo nuevamente el patriotismo de mis colegas, y les ruego me presten su apoyo en esta moción.

—Apoyado.

Sr. Argento—Para votar con conciencia desearía saber si ese procedimiento está establecido por el reglamento.

Sr. Presidente—El emplazamiento de la Comisión no está establecido por el reglamento; pero en la forma que establece su moción el señor Senador por Santa Fe no es propiamente un emplazamiento.

Sr. Argento—Entonces yo también apoyo la moción.

Sr. Presidente—Estando suficientemente apoyada la moción está en discusión.

Se ha presentado en este momento un mensaje del Poder Ejecutivo, relativo á esta misma cuestión.

Si el Senado lo desea podrá darse lectura de él.

—Así se hace en esta forma:

Al honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo, obsecuente con las manifestaciones de opinión que ha hecho ante el honorable Congreso y la Nación, tiene el honor de presentaros el proyecto de ley adjunto para fijar la Capital definitiva de la República en la ciudad de Buenos Aires, como lo anunció en el mensaje de 3 de octubre del año pasado, cerrando vuestras sesiones.

El intermento de la vida nacional bajo todas sus formas, los intereses propios y extraños que se hallan vinculados á la subsistencia de su gobierno, la urgencia de una seguridad mayor y el sentimiento de una próxima grandeza, han hablado ya en todos los espíritus, formando en el mayor número la convicción sobre la necesidad de buscar una solución á la última de nuestras cuestiones orgánicas, á fin de que la Nación tome plena posesión de su existencia y de sus destinos.

Los últimos acontecimientos han dado además á la necesidad sentida el carácter de un apremio evidente.

El Gobierno Nacional no puede quedar por siempre ó por mucho tiempo residiendo en Belgrano, porque sería convertir el episodio casual en una solución, sin dejar satisfecho ningún interés.

No podría igualmente volver á la ciudad de Buenos Aires, sin que se cambiaran las antiguas formas de su residencia, porque éstas han desaparecido bajo la experiencia más dolorosa; y sería volver á poner de pie las mismas causas de los males conocidos, sabiendo que producen discordias ó contiendas que no se detienen delante de la sangre.

Cuando la cuestión sobre la Capital ha sido traída en otras ocasiones al debate, se presentaban igualmente opiniones rectas y sinceras, disutiendo la oportunidad de su controversia ó de su solución. Esta faz del asunto ha desaparecido. Es inútil preguntar si es ó no oportuno, lo que es inevitable ó necesario. La situación presente, que es por su naturaleza y por los acontecimientos que la han producido, esencialmente transitoria, no tendrá un desenlace, sino dando una residencia propia y permanente á las autoridades nacionales.

El proyecto de ley designa á la ciudad de Buenos Aires para la Capital de la Nación.

La Capital en Buenos Aires es el voto nacional, porque es la voz misma de la tradición y la realización bajo formas legales del rasgo más

Agosto 24 de 1880

CAMARA DE SENADORES

22.ª sesión ordinaria

característico de nuestra historia; y se lo escucha claramente, cuando los grandes dolores ó los peligros supremos, han hecho acallar pasiones subalternas ó intereses del momento. Puede mañana sobrevenir el debate y sobrevenirá; pero acabamos todos de vivir un día, en el que la Capital en Buenos Aires ha sido aclamada como una necesidad por el mayor número de los que habitan las catorce provincias argentinas.

La Capital en Buenos Aires nada innova ni trastorna, sino que radica lo existente, dando seguridades mayores para lo futuro.

Es la única solución de nuestro problema, fundada para el porvenir, porque es la sola que no se improvisa ó inventa, la que viene traída por las corrientes de nuestra propia vida y la que se encuentra en la formación y en el desvolvemento de nuestro ser como Nación.

Es también la única solución en la verdadera acepción de la palabra, y ante los intereses presentes, porque da estabilidad y crea confianzas, mientras que cualquiera otra solución proyectándose con sus consecuencias en lo desconocido, infunde sospechas ó recelos y engendra peligros.

Dar otras formas al mismo mal, no es resolver una cuestión social ó política, que solo puede reputarse concluida, cuando se ha provisto á la seguridad ó la satisfacción de los grandes intereses que se agitan dentro de ella.

Una cuestión de Capital para una Nación, es una cuestión de influencia para el gobierno y sobre el gobierno que rige sus destinos. Erigiendo los argentinos la ciudad de Buenos Aires en Capital definitiva de la República, daremos influencia permanente para el gobierno y sobre el gobierno al grupo de hombres que vive en la esfera más culta, más espaciosa y más elevada; pero se la daremos con la autoridad de la Nación, en su nombre y con su sello, evitando así competencias y antagonismos locales que han dejado tantos sueros oscuros, ó sangrientos en nuestra historia.

Este es el pensamiento del Poder Ejecutivo. Queda ahora sometido á la superior deliberación del Congreso.

El Poder Ejecutivo cree que el proyecto adjunto será bien acogido por los poderes públicos de la provincia y por la opinión patriótica y libre de sus hijos.

Los acontecimientos vienen hablando después de tantos años. No hay conducta más suicida, ni egoísmo peor entendido que el que niega á su patria los verdaderos medios de subsistencia ó de desarrollo. El error argentino no hace sufrir sus consecuencias en Turquía ó en Rusia,

sino que lo pagamos todos en nuestra sangre, ó sobre nuestras cabezas, sintiendo empobrecidas ó alteradas las fuentes de la vida.

Dios guarde á Vuestra Honorabilidad.

N. AVELLANEDA.

B. ZORRILLA.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación, sancionan con fuerza de

LEY:

Artículo 1.º Declárase Capital de la República el Municipio de la ciudad de Buenos Aires, bajo sus límites actuales, y después que se haya cumplido el requisito constitucional de que habla el último artículo de esta ley.

Art. 2.º Todos los establecimientos y edificios públicos situados en el municipio, quedarán bajo la jurisdicción de la Nación, sin que los municipales pierdan por eso su carácter.

Art. 3.º Exceptúanse el Banco de la Provincia, el Banco Hipotecario y el Montepío, que permanecerán bajo la propiedad y la dirección de la provincia, sin alteración en su constitución actual.

La Provincia mantendrá igualmente la propiedad y la administración de sus ferrocarriles y telégrafos, aunque empiece su arranque en el municipio de la ciudad.

Art. 4.º La Nación tomará sobre sí la deuda exterior de la Provincia de Buenos Aires, previos los arreglos necesarios.

Art. 5.º El Gobierno de la Provincia podrá seguir funcionando sin jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, con ocupación de los edificios necesarios para su servicio, hasta que se traslade al lugar que sus leyes designen.

Art. 6.º Mientras el Congreso no organice en la Capital, la administración de la justicia, continuarán desempeñándola los juzgados y tribunales provinciales con su régimen presente.

Art. 7.º Esta ley sólo regirá, una vez que la legislatura de Buenos Aires haya hecho la cesión competente, prestando conformidad á sus cláusulas, con arreglo á lo dispuesto por el artículo 3.º de la Constitución Nacional.

Art. 8.º Comunicúese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

BENJAMÍN ZORRILLA.

—Levantóse luego la sesión siendo las 5 p. m.